

DEMANDA



Hugo Ferney Espinosa Orozco
Abogado



Doctora:

OLGA EMILIA MUÑOZ MONTOYA.

Juez Tercero Laboral del Circuito de Palmira.

E. S. D.

JUZGADO PRIMERO LABORAL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA

RECIBIDO
DIA 06 OCT 2014 AÑO

HORA

9:15 am

FIRMA

73/1s

Ref: Proceso Ordinario de Primera Instancia de Efraín Ortega Luna Contra Industrias Continental Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cia. S en C. S y Otros. Rad. 2010 - 269.

Muy Distinguida Doctora,

HUGO FERNEY ESPINOSA OROZCO, Abogado Titulado y en Ejercicio, mayor de edad y vecino del Municipio de Santiago de Cali, identificado conforme aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en mi condición conocida de Autos dentro del proceso referenciado, muy respetuosamente, me dirijo al Despacho a su digno cargo, a fin de solicitarle que, de conformidad a lo Normado en el Artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, se sirva librar mandamiento de pago contra los Señores: MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO y LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, identificados con las Cédulas de Ciudadanía No. 31.144.966, 66.758.723, 16.277.074 y 2.598.315, respectivamente, por las sumas de dinero señaladas en la Sentencia de Segunda Instancia; por las Costas Aprobadas en Primera y Segunda Instancia y por las Costas que se generen en el proceso ejecutivo.

Adjunto le hago llegar, copia de los documentos requeridos para tal fin.

Mi poderdante y el suscrito recibiremos las notificaciones en la Calle 30 No. 27 - 70, Oficina 406 del Edificio Banco Popular - Palmira, Teléfono: 285 96 53, Celular: 311 747 37 83.

Con todo respeto,

Medidas Previas



Hugo Ferney Espinosa Orozco

Abogado



Doctora:

OLGA EMILIA MUÑOZ MONTOYA.

Juez Tercero Laboral del Circuito de Palmira.

E. S. D.

Ref: Solicitud de Medidas Previas.

Muy Distinguida Doctora,

HUGO FERNEY ESPINOSA OROZCO, Abogado Titulado y en Ejercicio, mayor de edad y vecino del Municipio de Santiago de Cali, identificado conforme aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado del Señor **EFRAIN ORTEGA LUNA**, dentro del Proceso Ejecutivo Laboral adelantado contra los Señores: **MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO y LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL**, identificados con las Cédulas de Ciudadanía No. 31.144.966, 66.758.723, 16.277.074 y 2.598.315, respectivamente, muy respetuosamente, le solicito al Despacho a su digno cargo, para que el mandamiento de pago no sea ilusorio en sus efectos, decretar las siguientes medidas Previas sobre los Bienes que Bajo Juramento denunció son de propiedad de los Ejecutados:

A

1. El Embargo y Retención de los dineros que por cualquier concepto se encuentren depositados por la Señora **MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.144.966, en el Banco Davivienda S.A., Banco Agrario de Colombia, Banco Colpatría Red Multibanca Colpatría, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco **AVVILLAS**, Banco Caja Social BCSC y Banco BBVA; todos con oficinas en la Ciudad de Palmira, para lo cual, Ruego oficiar a los Señores Gerentes de dichas Entidades Bancarias.
2. El Embargo y Retención de los dineros que por cualquier concepto se encuentren depositados por la Señora **LUZ ELENA FLOREZ OSORIO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.758.723, en el Banco Davivienda S.A., Banco Agrario de Colombia, Banco Colpatría Red Multibanca Colpatría, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco **AVVILLAS**, Banco Caja Social BCSC y Banco BBVA; todos con oficinas en la Ciudad de Palmira, para lo cual, Ruego oficiar a los Señores Gerentes de dichas Entidades Bancarias.



Hugo Ferney Espinosa Orozco

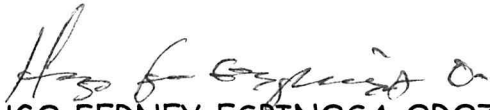
Abogado



3. El Embargo y Retención de los dineros que por cualquier concepto se encuentren depositados por el Señor **OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.277.074, en el Banco Davivienda S.A., Banco Agrario de Colombia, Banco Colpatría Red Multibanca Colpatría, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco **AVVILLAS**, Banco Caja Social BCSC y Banco BBVA; todos con oficinas en la Ciudad de Palmira, para lo cual, Ruego oficiar a los Señores Gerentes de dichas Entidades Bancarias.
4. El Embargo y Retención de los dineros que por cualquier concepto se encuentren depositados por el Señor **LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 2.598.315, en el Banco Davivienda S.A., Banco Agrario de Colombia, Banco Colpatría Red Multibanca Colpatría, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco **AVVILLAS**, Banco Caja Social BCSC y Banco BBVA; todos con oficinas en la Ciudad de Palmira, para lo cual, Ruego oficiar a los Señores Gerentes de dichas Entidades Bancarias.

La anterior solicitud la fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 del Código de Procedimiento Laboral.

Con todo respeto,


HUGO FERNEY ESPINOSA OROZCO.
CC. No. 94.486.629 de Cali - Valle.
TP. No. 156145 del C.S de la Judicatura.

251

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

REF: ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: EFRAÍN ORTEGA LUNA

DDO: INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C, LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO.

RAD.: 76-520-31-05-003-2010-00269

AUDIENCIA PÚBLICA DE JUZGAMIENTO N°. 46

En Palmira (Valle), siendo el día Treinta (30) del mes de enero del año dos mil doce (2012) las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora señalados para llevar a cabo diligencia de juzgamiento, la suscrita Juez Tercera Laboral del Circuito de Palmira (Valle), en asocio de su Secretaria, se constituyó en audiencia pública dentro del recinto del Juzgado declarando abierto el acto al cual no han concurrido las partes con le fin de proferir la siguiente:

S E N T E N C I A No. 001

El señor EFRAÍN ORTEGA LUNA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.311.477 de Palmira Valle, por conducto de apoderada judicial, adelantó la presente demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia en contra de la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO Y LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, con el fin de que se declare la existencia



de un contrato de trabajo a término indefinido entre el señor EFRAÍN ORTEGA LUNA y la demandada INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN; que se declare la ineficacia del despido por parte de INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN, puesto que el señor EFRAÍN ORTEGA LUNA fue despedido sin autorización del inspector del trabajo siendo una persona discapacitada y padeciendo una pérdida de la capacidad laboral del 26.52% según calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y que se ordene el reintegro del señor Efraín Ortega Luna al cargo desempeñado y las demás pretensiones plasmadas en el libelo demandatorio.

Para respaldar dichas pretensiones, informó el actor los siguientes hechos:

Que el demandante se vinculó mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido el día 25 de agosto de 2003 con la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN hasta el día 6 de Noviembre de 2008, fecha en la cual fue despedido sin justa causa.

Que el actor desempeñó para la Sociedad demandada quien era su empleador, el cargo de OPERARIO, recibiendo un salario mínimo legal mensual desde el 25 de agosto de 2003 hasta el 6 de Noviembre de 2008.

Que el Actor debido a la actividad laboral que desempeñaba adquirió una enfermedad de origen profesional.

Que el día 23 de Mayo de 2003, la Vicepresidencia de riesgos laborales del ISS, le notificó al actor que padecía de una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 23.78%.

Que el día 4 de enero de 2008 el representante legal de la sociedad demandada solicito ante la Inspección del trabajo y Seguridad Social del Municipio de Palmira Valle autorización para dar por terminado el contrato de trabajo entre el actor y la sociedad demandada.

Que mediante resolución No. 0055 del 18 de abril de 2008, la Inspección del trabajo y Seguridad Social de Palmira Valle, resolvió no autorizar la terminación



del contrato de trabajo del Actor.

Que el día 10 de junio de 2008 el Actor fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entidad que determinó que el demandante padecía una pérdida de la capacidad laboral del 26.52%.

Que el día 6 de Noviembre de 2008 la sociedad demandada decidió despedir al actor, aun cuando el inspector del trabajo no autorizó a dicha sociedad, para dar por terminado el vínculo laboral antes mencionado.

Que el actor interpuso acción de tutela en contra de la sociedad demandada con el fin de solicitar el reintegro, el cual fue ordenado por el juez de tutela.

Que aunque la sociedad demandada se abstuvo de cumplir el fallo de tutela, el juez de tutela no sancionó a la sociedad demandada, porque al momento de realizarse la inspección judicial, la empresa no se encontraba realizando las funciones establecidas en su razón social.

ACTUACIÓN PROCESAL

Presentada la demanda fue Inadmitida mediante auto interlocutorio No. 1363, del 03 de noviembre de 2010, luego de ser subsanada la demanda por el apoderado del actor es admitida mediante auto interlocutorio No. 1404 del 10 de septiembre de 2010, ordenándose notificar personalmente al representante legal de la sociedad demandada y a los demás accionados.

El representante legal de la sociedad Demandada Luis Octavio Florez López se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el 6 de octubre de 2010 a través de apoderada Judicial debidamente autorizado para ello. (fl. 24), quien dio respuesta dentro del término legal, manifestando que los hechos 1 y 2 de la demanda son ciertos, que el hecho tercero es parcialmente cierto puesto que la sociedad demandada si le hizo varios llamados de atención al accionante, y el demandante sostiene que nunca hubo queja alguna en su contra, que el hecho cuarto no es un hecho sino una apreciación subjetiva, que el hecho quinto es cierto, al igual que el hecho sexto, que el hecho séptimo no le consta, que el hecho octavo es cierto, que el hecho Noveno no le consta, que el hecho décimo es cierto, que el hecho undécimo es parcialmente cierto en cuanto a que si hubo una terminación de la relación laboral entre la sociedad demandada y el accionante, en

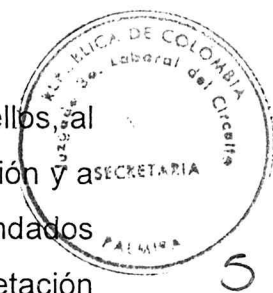
la fecha que manifiesta dicho accionante, pero para la fecha de terminación el actor no estaba incapacitado, el hecho duodécimo es parcialmente cierto, porque aunque es cierto que el actor presentó una demanda de tutela en contra de la Sociedad Demandada, no es cierto que la sociedad accionada haya incumplido la decisión del Ministerio de protección social, de no autorizar el despido del actor. El hecho décimo tercero es cierto, el décimo cuarto es cierto, el décimo quinto no le consta, el décimo sexto es cierto, y el hecho décimo octavo es cierto.



Luego la sociedad demandada no se opone a la primera pretensión, y se opone a las demás pretensiones de la demanda.

Posteriormente la sociedad demandada propone como excepciones de fondo, la inexistencia de obligación a su cargo, Interpretación errónea de la ley 361 de 1997, Inexistencia de prueba que acredite la condición de discapacitado del Señor Efraín Ortega Luna, la Buena fe, la Improcedencia del reintegro, la Imposibilidad Material y legal de la Sociedad Demandada, para continuar con su nómina para el mes de Noviembre de 2008, la imposibilidad legal de realizar pago alguno por parte de la Sociedad Demandada.

Los demandados MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ HELENA FLOREZ OSORIO fueron notificados por medio de Aviso, notificación que quedó surtida el día 26 de noviembre de 2010; quienes dieron respuesta dentro del término legal, manifestando que los hechos 1 y 2 de la demanda son ciertos, que el hecho tercero es parcialmente cierto puesto que los demandados si le hicieron varios llamados de atención al accionante , y el demandante sostiene que nunca hubo queja alguna en su contra, que el hecho cuarto no es cierto, que el hecho quinto es un hecho ajeno a los demandados , que el hecho sexto es cierto, que el hecho séptimo no le consta, que el hecho octavo es cierto, que el hecho Noveno no le consta, que el hecho décimo es cierto, que el hecho undécimo es parcialmente cierto en cuanto a que si hubo una terminación de la relación laboral entre la sociedad demandada y el accionante, en la fecha que manifiesta dicho accionante, pero para la fecha de terminación el actor no estaba incapacitado, el hecho duodécimo es parcialmente cierto, porque aunque es cierto que el actor presentó una demanda de tutela en contra de la Sociedad Demandada, no es cierto que la sociedad accionada haya incumplido la decisión del Ministerio de protección social, de no autorizar el despido del actor. El hecho décimo tercero es cierto, el décimo cuarto es cierto, el décimo quinto no le consta, el décimo sexto es cierto, y el hecho décimo octavo es cierto.



Luego los demandados manifiestan que la primera pretensión es ajena a ellos, al igual que la segunda y la tercera pretensión, se oponen a la cuarta pretensión y a las demás pretensiones de la demanda. Posteriormente los demandados proponen las excepciones de fondo de Inexistencia de Obligación, Interpretación errónea de la ley 361 de 1997, inexistencia de prueba que acredite la condición de discapacitado del Señor Efraín Ortega Luna, Buena Fe, Improcedencia del reintegro, Imposibilidad Material y legal de Industrias continental, Artículos eléctricos Flórez Osorio y Cia S.en C en Reorganización para continuar con su nómina para el mes de Noviembre de 2008, Imposibilidad legal de realizar pago alguno por parte de Industrias Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio S.en.C en Reorganización, Genérica o innominada.

Luego de lo anterior, el presente Juzgado en Audiencia Pública No. 264, del 11 de abril de 2011, declaró fracasada la etapa conciliatoria por falta de ánimo conciliatorio de las partes procesales y por lo anterior se continuará con el trámite del proceso.

CONSIDERACIONES

Es a partir del hecho 1, 2, 4, 5, 6, 7,10, 11 del libelo demandatorio y la contestación a los mismos por parte de la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTICULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S.EN C EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN y de los demandados MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO, y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO que este Juzgado en conjunto con el acervo probatorio entrará a dilucidar la existencia o no, de los derechos reclamados por la parte actora, y en particular de la existencia de una relación laboral a término indefinido entre el accionante y la sociedad demandada, del derecho al reintegro, de la indemnización sanción contemplada en la ley 361 de 1997, y de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir por el actor desde que fue despedido por la sociedad demandada.

Al respecto, el demandante afirmó haber iniciado a laborar como trabajador de la sociedad demandada el día 25 de abril 2003, mediante contrato de trabajo a término indefinido hasta el día 6 de Noviembre de 2008, fecha en la cual fue despedido por su empleador, que desempeñó el cargo de Operario, que recibía como remuneración el salario mínimo legal mensual vigente durante todo el tiempo trabajado, y cumplía el horario de trabajo señalado por la sociedad

demandada. Por su parte la sociedad accionada en la contestación de la demanda aceptó que si existió una relación laboral entre ella y el actor, cuando admitió como cierto el hecho número 1.



El demandante también afirmó que debido a la actividad laboral desempeñada mientras trabajó para la sociedad demandada, adquirió una enfermedad profesional, generándole una pérdida de la capacidad laboral del 26.52% según calificación de la Junta Regional de Invalidez y que la sociedad accionada lo despidió aún cuando anteriormente la inspección del trabajo y de la seguridad social del Municipio de Palmira, se negó a darle autorización a la sociedad accionada para dar por terminado el contrato de trabajo que tenía con el señor Efraín Ortega Luna. Por su parte la sociedad accionada manifestó que la Enfermedad de origen profesional fue adquirida por el señor Efraín Ortega Luna antes de iniciar sus labores con la sociedad y que al momento de ser despedido por la sociedad accionada el demandante no era una persona discapacitada.

Adicionalmente los demandados MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO, reconocieron como cierta la relación laboral entre la sociedad demandada y el accionante, manifestaron que el señor ORTEGA LUNA, adquirió su afección antes de empezar a trabajar con la sociedad demandada y que al momento de ser despedido el señor EFRAÍN ORTEGA LUNA, no era una persona discapacitada, y por lo tanto la decisión de la Inspección del trabajo y de la seguridad social de no autorizar el despido del demandante, no era obligatoria para la sociedad.

RELACION LABORAL

Del acervo probatorio se desprende que el señor EFRAÍN ORTEGA LUNA trabajó para la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS S en C entre el 23 de mayo de 2003 y el 6 de noviembre de 2008, puesto que la sociedad demandada en la contestación de la demanda admitió como cierto el hecho número 1, reconociendo que si tuvo una relación laboral con el demandante. Además dentro de las pruebas documentales aportadas al proceso, se aprecia una carta de la sociedad demandada donde se le da por terminado unilateralmente el contrato de trabajo al señor Efraín Ortega Luna. El demandante también aportó al proceso una certificación donde se expresa con claridad que el señor Ortega Luna laboró para la sociedad demandada desde el 25 de agosto de

257

2003 hasta el 6 de noviembre de 2008, desempeñando las funciones de Operario. Como se dijo anteriormente si existió una relación laboral entre el accionante y la sociedad demandada, no solo porque así lo demuestran las pruebas documentales, sino también porque la misma sociedad demandada en la contestación de la demanda, mediante confesión espontánea reconoció que si tuvo un contrato de trabajo a término indefinido con el accionante.



El actor también aportó como prueba documental la liquidación del salario y de las prestaciones sociales expedida por la sociedad demandada.

A su vez, la sociedad demandada aportó como pruebas documentales, una suspensión por tres días contra el Señor Efraín Ortega Luna, un Acta de Descargo en contra del accionante y tres llamados de atención, documentos que confirman que si existió relación laboral entre la sociedad demandada y el señor Ortega Luna. También se aportó al proceso una copia del comprobante de egreso del pago de prestaciones sociales y de indemnización por despido injusto en favor del accionante.

Con respecto a los testimonios practicados dentro del proceso se tiene la declaración del señor Andrés Felipe Arias Cuervo.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ANDRES FELIPE ARIAS CUERVO: (Fls 189 a 192).

El testigo manifestó conocer al actor en INDUSTRIAS CONTINENTAL en el año 2003, y expresó que cuando el accionado comenzó a trabajar en dicha empresa lo hizo en una Trefiladora, después estuvo incapacitado un período de tiempo, y al regresar trabajó en una maquina donde no realizaba mucho esfuerzo. El señor Cuervo Florez También manifestó que la razón por la cual el accionante estaba permanente incapacitado era porque padecía de un problema en la columna.

Por otro lado el testigo también manifestó que el accionante fue desvinculado de la empresa por la difícil situación económica que tenía dicha empresa.

El Señor Arias Cuervo afirmó ser compañero de trabajo del accionante, y expresó que el señor Ortega Luna tenía una buena relación con los compañeros de trabajo, pero una mala relación con sus jefes.

El testigo expresó también que la señora Fanny Florez, era la persona que le hacía los llamados de atención al señor Ortega Luna, por el comportamiento grosero de este. Por otro lado el testigo afirmó que al demandado le pagaron la indemnización al momento de terminación del contrato, al igual que a otros trabajadores que salieron en esa época.



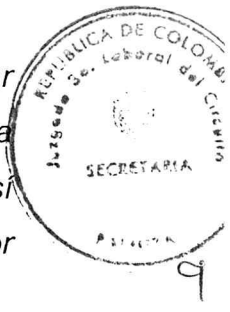
El señor Cuervo Florez dentro de su declaración manifestó también que el demandante fue reubicado por la empresa debido a que la E.P.S SOS mando un comunicado para que se realizara dicha reubicación. El testigo también dijo que el accionante no le reportó a la empresa el accidente que sufrió. Por último el testigo expresó que la sociedad demandada si solicitó al ministerio de protección social, autorización para despedir al demandante.

De acuerdo al testimonio anterior también se vislumbra la existencia de una relación laboral entre la sociedad demandada y el señor Ortega Luna.

INEFICACIA DEL DESPIDO

El señor Efraín Ortega Luna, fue calificado por la Vicepresidencia de Riesgos Labores del ISS, con una pérdida de la capacidad laboral del 23.78%, posteriormente el demandante acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entidad que lo calificó con una pérdida de la capacidad laboral del 26.52% derivada de una enfermedad de origen profesional.

La sociedad demandada le solicito a la inspección del trabajo y la seguridad social del Municipio de Palmira autorización para despedir al demandante, solicitud que no prosperó debido al estado de Vulnerabilidad en que se encontraba el accionado, y la sociedad accionada, desconociendo la anterior decisión, tomo la determinación de dar por terminada unilateralmente la relación laboral que tenía con el señor Ortega Luna. La sociedad demandada al despedir al señor Ortega Luna vulneró la ley 361 de 1997 en su artículo 26, puesto que obstaculizó la vinculación laboral de una persona que padecía y padece de una incapacidad permanente parcial (de acuerdo al dictamen de la Junta regional de Calificación de la Invalidez) y por lo tanto dicha sociedad accionada no podía despedir al señor ORTEGA LUNA, a menos que el despido hubiera sido autorizado por la Inspección del Trabajo del Municipio de Palmira, pero dicha autorización no se obtuvo. El artículo 26 de la mencionada ley 361 de 1997 reza así:



“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.

Por lo anterior se vislumbra que el despido realizado por la sociedad demandada es ineficaz puesto que el señor Ortega Luna fue despedido por la sociedad demandada aun cuando la inspección del trabajo de Palmira Valle no autorizó dicho despido.

La honorable Corte Constitucional en la sentencia T – 300 de abril de 2008 dijo lo siguiente:

“Corresponde al Ministerio de Protección Social calificar la terminación unilateral del contrato, con una persona incapacitada física, mental o sensorialmente para desempeñar la labor encomendada y que, de llegarse a producir el despido sin la debida autorización, la decisión carece de todo efecto jurídico”.

Si bien es cierto que el despido realizado por la sociedad demandada es ineficaz, y por lo tanto sería procedente el reintegro del señor Ortega Luna a su puesto de trabajo, o a un puesto acorde a sus limitaciones físicas, también es cierto que ordenar dicho reintegro sería como imponerle un imposible a la sociedad demandada, puesto que dicha sociedad no se encuentra realizando ninguna actividad industrial, no tiene trabajadores a su cargo, y no está realizando su objeto social, Motivo por el cual el juzgado se abstendrá de ordenar el reintegro del demandante.

INDEMNIZACIÓN SANCIÓN DE LA LEY 361 DE 1997



En el caso en cuestión el demandante fue despedido por la sociedad demandada a sabiendas de que la inspección del trabajo no había autorizado el despido del señor Ortega Luna y por lo tanto el accionante tiene derecho a que la sociedad demandada le pague la indemnización sanción contemplada en la ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario. Es preciso anotar que en el momento en que fue despedido el señor Ortega Luna, la Junta Regional de Calificación de Invalidez ya había calificado la pérdida de capacidad laboral del demandado, y dicha calificación dice claramente que el señor Ortega Luna si padecía de una discapacidad del 4,20%. Dicha discapacidad no es recuperable con el tiempo por tratarse de una incapacidad permanente parcial de conformidad con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y por lo tanto los demandados se equivocan al expresar en sus respectivas contestaciones que al momento del despido, el demandante no era una persona discapacitada. Por lo dicho anteriormente El señor Ortega Luna tiene derecho a la indemnización de la ley 361 de 1997 consagrada en su artículo 26, puesto que fue despedido por la sociedad demandada sin la autorización del Ministerio de protección social por encontrarse en un estado de debilidad manifiesta (Incapacidad permanente parcial comprobada).

El artículo 26 de la ley 361 de 1997 reza así: *"En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.*

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren".

Por otro lado es necesario decir que en el caso en que no se hubiera expedido dictamen alguno de la entidad competente, la sociedad demandada tampoco habría podido despedir al señor Ortega Luna de acuerdo a lo establecido en la sentencia T – 1041 de 2001, puesto que la Corte Constitucional en dicho falló expresó que las personas que se encuentran bajo una debilidad manifiesta ya sea por su situación de salud o por sus condiciones físicas que les impida el desarrollo

261

normal de sus actividades, gozan de protección especial sin necesidad de que se expida una certificación que demuestre su discapacidad. El referido fallo reza así: En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o les dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitado".

11

Por lo expresado anteriormente la sociedad demandada deberá pagarle al señor Ortega Luna Efraín la indemnización sanción de la ley 361 de 1997 que equivale a dos millones setecientos sesenta y nueve mil pesos (\$2.769.000) pesos. Lo anterior puesto que la ley habla de 180 días de salario, y como el demandante siempre devengó el salario mínimo, entonces la indemnización se calcula con base en el salario mínimo de 2008, año en que el demandante fue despedido; suma que deberá indexarse a partir del 07 de Noviembre de 2.008 hasta el momento de su pago.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO.

En el caso en cuestión aunque el señor Efraín Ortega Luna tendría derecho a ser reintegrado por la sociedad demandada al mismo cargo o a un cargo de acuerdo a sus limitaciones físicas, dicho reintegro generaría mayores inconvenientes tanto para él como para la sociedad demandada, puesto que el accionante no podría desarrollar ninguna labor dentro de la empresa ya que la sociedad accionada no está realizando ninguna actividad industrial y no está desarrollando su objeto social (no está funcionando). Por lo anterior obligar a la empresa a reintegrar al señor Ortega Luna sería como imponerle un imposible, una orden inmaterializable y por lo tanto en aras de proteger los intereses del demandante y de no imponer decisiones absurdas y contrarias a la realidad por ser de imposible cumplimiento, la sociedad demandada deberá reconocer en favor del accionante la indemnización sanción de la ley 361 de 1997, sin que haya lugar al reintegro.

El demandante también tendría derecho a que le reconocieran el pago de la indemnización por despido sin justa causa consagrada en los artículo 64 del código sustantivo del trabajo, pero dicha indemnización le fue reconocida al señor Ortega Luna cuando fue desvinculado de la empresa.

El artículo 64 del código sustantivo del trabajo reza así:

“ En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.



En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:

a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales:

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.

1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción”.



13

Es necesario mencionar que la parte demandante aportó al proceso la sentencia de Tutela, 053 de 2009 y 043 de Junio de 2009, mediante la cuales se ordenó el reintegro del accionante a la empresa y el pago de todos los salarios y prestaciones sociales adeudados, pero aunque la sociedad demandada no cumplió con la sentencia de tutela al no reintegrar al trabajador, el juez mediante Auto interlocutorio del 5 de mayo de 2010, se abstuvo de sancionar por desacato a la sociedad demandada, por considerar que de acuerdo a la inspección judicial que se practicó para decidir dicho incidente, en ese momento la empresa no tenía *"ningún trabajador bajo su égida, por no estar realizando ninguna actividad industrial, no se le podía imponer imposibles, ni imponerles situaciones inentendibles e inmaterializables"* posición que se comparte puesto que si bien es cierto la sociedad demandada no está liquidada ni extinta, ordenar el reintegro del trabajador sería como imponerle un imposible a la sociedad demandada, puesto que dicha sociedad no está realizando actividad industrial, no está cumpliendo con su objeto social y no está realizando función alguna.

EXCEPCIONES

Habiendo quedado establecido que entre la parte demandante y la sociedad demandada, existió una relación laboral LA CUAL estuvo vigente entre el 25 de agosto de 2003 y el 6 de noviembre de 2008 y de la cual nace para la sociedad demandada la obligación de pagarle al accionante la indemnización sanción de la ley 361 de 1997 por haberlo despedido sin la autorización de la Inspección del trabajo, por encontrarse limitado físicamente, HABRA QUE DECLARARSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES de Fondo Propuestas por Los demandados.

Los demandados MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO Y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO deberán responder por la anterior condena, en caso de que la sociedad demandada no tenga como asumirla, pero solo hasta el monto de sus aportes en dicha sociedad, por tratarse de Socios Comanditarios.

Los demandados deberán ser condenados al pago de las costas que se llegaren a liquidar en este proceso.

2.64

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito (V) administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,



RESUELVE

PRIMERO: Declarar no probadas las Excepciones de Fondo propuestas por los Demandados.

SEGUNDO: CONDENASE a la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C a pagar en favor del señor Efraín Ortega Luna la suma de Dos millones setecientos sesenta y nueve mil pesos (\$2.769.000) por concepto de la indemnización sanción contemplada en la ley 361 de 1997 y a los señores MARIA NUBIA FLORES OSORIO, LUZ ELENA FLOREZ OSORIO Y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO quienes responderán hasta el monto de sus aportes, de conformidad con el artículo 323 del Código de Comercio; suma que deberá ser indexada a partir del 07 de Noviembre de 2.008 hasta el momento de su pago.

TERCERO: Absolver a los demandados con respecto a las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO : CONDENASE en costas a la parte demandada, las cuales se tasarán por secretaría en su debida oportunidad procesal.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,


OLGA E MUÑOZ MONTOYA

El secretario


CARLOS ALBERTO VELASQUEZ OSPINA



15

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C., en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.

AUDIENCIA PÚBLICA No. 0165

En Buga, Valle, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil trece (2013), la magistrada ponente, **MARÍA MATILDE TREJOS AGUILAR**, en asocio de sus similares, los doctores **MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA** y **DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ**, con quienes conforma la Sala Cuarta de Decisión Laboral, se constituyen en audiencia pública, para publicitar la

SENTENCIA No.022

Discutida y Aprobada en Acta No. 07

I. ANTECEDENTES

El señor **EFRAÍN ORTEGA LUNA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.311.477, demandó en acción ordinaria de primera instancia a la empresa **INDUSTRIA CONTINENTAL, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C., EN**

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



16
PROCESO DE REORGANIZACIÓN, representada por el señor LUIS OCTAVIO FLÓREZ ARISTIZABAL y solidariamente a los miembros de tal sociedad, LUIS OCTAVIO FLÓREZ ARISTIZABAL, MARÍA NUBIA, MARÍA FANNY, LUZ ELENA Y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO, a fin de obtener, en forma principal, el reintegro al cargo que desempeñaba o al que se cree, de acuerdo con las restricciones prescritas por su médico tratante; los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha del reintegro; los aportes al sistema de seguridad social integral, dejados de sufragar hasta la fecha del reintegro y todo derecho que se pruebe en virtud de las facultades *ultra y extra petita*. Subsidiariamente solicitó la indemnización por despido establecida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997; otros derechos que se prueben en el curso del proceso y las cosas de la actuación -folios 63 y 64-.

Las anteriores peticiones hallaron apoyo en las siguientes premisas fácticas:

Que la relación que unió a las partes estuvo regida por un contrato de trabajo a término indefinido que se extendió entre el 25 de agosto de 2003 y el 6 de noviembre de 2008, data en que la empresa dio por terminada la relación, sin autorización de la oficina administrativa del trabajo y en virtud a ello, el demandante se vio

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



obligado a instaurar una acción de tutela contra la hoy demandada, a fin de que se le reconociera la estabilidad laboral reforzada y la seguridad social integral, trámite que culminó con sentencia de segunda instancia favorable a sus intereses, pues se dispuso su reintegro, sin embargo, la encartada no cumplió la orden constitucional y por ello inició incidente por desacato a orden de tutela que culminó con absolución -folios 59 a 62-.

Admitida la demanda por el Juzgado Tercero Laboral del Palmira, despacho al que correspondió en reparto, se dio en traslado al demandado (folios 73, 90, 133 a 146), quienes se pronunciaron en las siguientes circunstancias:

El señor Luis Octavio Flórez Aristizabal, en su calidad de representante legal de INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C.- EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN y como persona natural, a través de apoderada judicial respondió la demanda (folios 102 a 131), en oposición al despacho favorable de las pretensiones esgrimidas en su contra, dado que a la fecha de la terminación del contrato de trabajo, el accionante no ostentaba la condición de discapacitado, siendo así como interpuso en su contra las excepciones de fondo de inexistencia de obligación a cargo de mi representada; interpretación errónea de la Ley 361 de 1997;

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



inexistencia de prueba que acredite la condición de discapacitado del señor Efraín Ortega Luna; buena fe; improcedencia del reintegro; imposibilidad material y legal de Industrias Continental, artículos Eléctricos Flórez Osorio & Cía. S. en C., en reorganización para continuar con su nómina para el mes de noviembre de 2008; imposibilidad legal de realizar pago alguno por parte de Industrias Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio & Cía. S. en C., en reorganización y la genérica o innominada.

Por su parte, los señores María Nubia Oscar Alonso y Luz Elena Flórez Osorio, a través de mandataria judicial también se pronunciaron en oposición a las pretensiones de la demanda y formulación de excepciones de fondo, al considerar que a la fecha de terminación del contrato de trabajo el actor no gozaba de la estabilidad reforzada que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y que la empresa de la cual son socios, se encuentra en imposibilidad de realizar pagos de nómina o por otro concepto al interesado, por encontrarse en proceso de reorganización, de acuerdo a la Ley 1116 de 2006- folios 151 a 178-.

Admitida la demanda (folio 179), se celebró la audiencia inicial, misma en que no se presentó composición entre las partes y se decretaron las pruebas por ellas pedidas -folios 181 a 183-.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



19

Concluido el periodo probatorio, el juzgado de conocimiento finiquitó la primera instancia a través de la sentencia No. 001 del 30 de enero de 2012 (folios 255 a 264), mediante la cual condenó a la INDUSTRIA CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C., a pagar al demandante la suma de \$2.769.000,00 (debidamente indexada a partir del 07 de noviembre de 2008), a título de indemnización establecida en la Ley 361 de 1997 y a los señores MARÍA NUBIA, LUZ ELENA Y OSCAR ALONSO FLÓREZ OSORIO, quienes responde hasta el monto de sus aportes, de conformidad a lo previsto en el artículo 323 del Código del Comercio.

La decisión anterior emanó luego de que el juzgado considerara el Ministerio del Trabajo no autorizó a la sociedad demandada para que despidiera al actor, debido a su estado de vulnerabilidad, sin embargo lo hizo y así, obstaculizó la vinculación laboral de una persona que padecía y padece una incapacidad permanente parcial, conforme al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, configurándose de contera un despido ineficaz que conlleva a que en principio procedería el reintegro del ex trabajador, si no fuera porque la sociedad demandada no se encuentra materialmente activa, pues no está realizando su objeto social; pero que sí está en la obligación

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



de responder por la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 20

También adujo que si bien procedería el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, no es procedente su reconocimiento por cuanto la sociedad demandada la reconoció y pagó al demandante al momento de la desvinculación.

Y, finalmente refirió que los codemandados MARÍA NUBIA, LUZ ELENA Y OSCAR ALONSO FLÓREZ OSORIO debían responder por la anterior condena, en su calidad de socios comanditarios de la empresa enunciada, pero hasta el monto de sus aportes en la misma.

Contra la sentencia en reseña, las partes incoaron recurso de apelación, en los siguientes términos:

- Los señores MARÍA NUBIA, LUZ ELENA Y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO, a través de su apoderada judicial, adujeron que no era procedente condena en su contra, puesto que el demandante no tenía la calidad de discapacitado al momento en que se rompió el nexos social, conforme a la definición que contiene el artículo 3° de la convención interamericana para la eliminación de todas

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



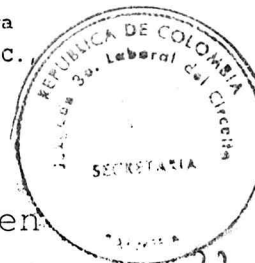
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, incorporada a la legislación patria a través de la Ley 762 de 2002, mismas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitución en sentencia C-401 de 2003, en tanto que las consecuencias de radioculopatía y los trastornos de disco lumbar que padece no lo limitan para realizar actividades esenciales de la vida diaria.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Ley 361 de 1997, las personas discapacitadas deben estar carnetizadas y calificadas como tales, condición que no acreditó el demandante y por ello es que considera que el juzgado no valoró el acervo probatorio, pues lo que este indica es que el contrato de trabajo fue terminado conforme a los lineamientos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la empresa a la que prestaba servicios aquel estaba imposibilitada para continuar funcionando.

- La empresa demandada, a través de mandataria judicial se mostró inconforme con la decisión de primera instancia, en lo sustancial por las mismas razones esbozadas por los otros demandados a las que agregó que para la fecha del despido del actor estaban superadas las razones expuestas por

299

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cia. S. en C., en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



el Ministerio de la Protección Social, en Resolución No. 0055 del 18 de abril de 2008 para no autorizar el despido -folios 268 a 272-.

- Y el demandante, por ante su abogado, solicitó el reconocimiento de las pretensiones principales de la demanda y que se emita pronunciamiento respecto del demandado LUIS OCTAVIO FLÓREZ ARISTIZABAL, en calidad de socio de la empresa demandada.

Dichas pretensiones se fundaron en que, por un lado, el juzgado omitió emitir orden respecto al señor Luis Octavio Flórez Aristizabal, quien fue demandado como persona natural y socio de la empresa llamada a juicio, no obstante lo cual, el juzgado lo excluyó del extremo pasivo al momento de proferir sentencia.

De otra parte, alegó el recurrente que debe ordenarse el reintegro del ex trabajador, dado que la empresa se encuentra operando, contrario a lo afirmado por el juzgado, tal como se deduce del certificado de existencia y representación que reposa en el expediente, además porque el juzgado concluyó que el despido es ineficaz y en consecuencia se debe ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y de los salarios y prestaciones dejados de

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



percibir desde el despido hasta la
reinstalación -folios 274 a 277-.

Concedidos los recurso y tramitada en legal forma la segunda instancia, procede la Sala a tomar la decisión que en derecho corresponda y para hacerlo se valdrá de unas breves pero necesarias

II. CONSIDERACIONES

De los recursos de apelación detallados, se colige que la atención de la Corporación se ha de centrar en determinar si a la fecha de la terminación del contrato de trabajo que unió a los enfrentados en *litis*, el demandante ostentaba la condición de discapacitado y por ende, destinatario del reintegro y las pretensiones accesorias.

Ab initio, anota el Tribunal que no prosperará el recurso presentado por la parte plural demandada, pero sí el formulado por el actor, como se explica enseguida.

El debate giró en torno a la ineficacia del despido de que fue objeto el actor y por ende a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



Bien, el artículo 47 de la Constitución Política impuso al Estado tiene el deber de "adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran" y por otra parte, en su artículo 13 propugna porque el derecho a la igualdad de las personas con limitaciones sea real y efectivo y en tal sentido obliga al Estado a que adopte medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que por su condición física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha dado en llamarse por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas.

Estos mandatos fueron desarrollados esencialmente por la Ley 361 de 1997, por la cual se establecieron mecanismos de integración social de las personas con limitación y que en su artículo 24 consagra que el Gobierno Nacional, dentro de la política nacional de empleo, adoptará medidas dirigidas a la creación y fomento de fuentes de trabajo para las personas con limitación física.

De igual manera, la Ley 361 de 1997, que con su artículo 26, busca proteger a las personas que sufren una limitación originada en invalidez o minusvalía, ha establecido programas de promoción de empleo y garantías para los empleadores que los vinculen laboralmente, con preferencias

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



licitatorias o adjudicación y celebración de contratos públicos o privados y del mismo modo establece mecanismos de prevalencia para que las personas vinculadas laboralmente en tales condiciones, permanezcan en el empleo mientras no se produzca una justa causa de despido, lo que se ha denominado "estabilidad laboral reforzada"; es decir que, como lo ha afirmado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, la norma mencionada establece que *"...la limitación de una persona, no podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar"*.

De tal manera que dentro de lo que puede denominarse protección laboral negativa, la Ley 361 de 1997 ordena que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato de trabajo terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por tal razón y sin el cumplimiento del requisito previsto en ella, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cia. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



La Corte Constitucional en sentencia C-531 del 5 de mayo de 2000, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido que el pago de la indemnización al trabajador discapacitado no convierte el despido en eficaz, si este no ha estado antecedido de la autorización del Ministerio de la Protección Social. En este sentido, la indemnización constituye simplemente una sanción para el empleador, más no una facultad para que despida sin justa causa al trabajador discapacitado. Esto dijo la Corte en aquella oportunidad:

"...Para la consecución de esos fines, la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas.

Tal seguridad ha sido identificada como una "estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



embarazadas y los trabajadores aforados, en la forma ya analizada por esta Corporación.

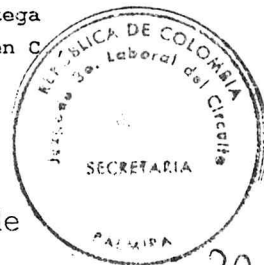
En tal situación, el requerimiento de la autorización de la oficina de Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al trabajador.

(...)

Sin embargo, la verdadera naturaleza de la indemnización que allí se plantea enerva el argumento de la inconstitucionalidad de la disposición legal, por cuanto dicha indemnización presenta un carácter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia jurídica al despido o a la terminación del contrato de la persona con limitación, sin previa autorización de la oficina de Trabajo.

En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal referido los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



indemnización sancionatoria. ..." (Subrayas fuera de texto).

Para determinar si una persona es limitada o disminuida físicamente, el artículo 5° de la Ley 361 de 1997, dispone que deben aparecer "...calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea al régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificación a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente". Y agrega el canon citado que el carné que se le expida a la persona disminuida físicamente o con limitación, le servirá "...para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente ley." (Subrayado fuera del texto original)

Cotejada la facticidad con el contenido del artículo 5° de la ley en mención, se concluye que a la fecha de la desvinculación del actor -7 de noviembre de 2008-, existía prueba que acreditara que era una persona discapacitada; pues aparece el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca (folio 12), experticia que se emitió el 10 de julio de 2008 y en la cual se le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 26.52%.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



Es que en lo que atañe a la demostración de la discapacidad, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de febrero de 2006, proferida en proceso radicado bajo el número 25.130, sostuvo:

"...Para la Corte es claro que ningún juez puede dar por demostrada una discapacidad física como la alegada por el actor, surgida según lo afirma en su demanda de una enfermedad denominada aplasia medular, con cualquier medio de prueba. Se trata de un hecho que debe ser establecido científicamente y para ello es prudente acudir al dictamen pericial, como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil".

En efecto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca conceptuó que el accionante mermó en su capacidad laboral en un 26,52%, calificación que lo habilita para que sea catalogado como discapacitado, conforme a las voces de la Ley 361 de 1997.

Este ha sido el criterio pregonado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual dejó plasmado en un caso similar al aquí examinado, en el que expresó que una discapacidad superior al 25%, constituye limitación física o minusvalía.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



En ese sentido reflexionó la Corte en la sentencia proferida en proceso radicado bajo el No. 32532 de fecha 15 de julio de 2008:

"...Aclarado lo anterior, se observa que la Ley 361 de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa.

(...)

Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para **aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.**

Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias.

Pues bien, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997; define que la limitación "moderada" es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; "severa", la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y "profunda" cuando el grado de minusvalía supera el 50%.

En las condiciones anotadas es claro que el juzgador de segundo grado se equivocó al aplicar en este asunto el artículo 5 de la Ley 776 de 2002, pues si bien este precepto limita los grados en que se encuentra comprendida la incapacidad permanente parcial lo hace de manera expresa para los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales y para los fines de las indemnizaciones y prestaciones que cubre este régimen, que obviamente no guarda relación con el tema de estabilidad laboral que protege la Ley 361 de 1997.

Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



moderada, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º. .." (El acento es del Tribunal).

Por otro lado, la Ley 762 del 31 de julio de 2002, publicada en el Diario Oficial número 44.889 del 31 de agosto del año mencionado, por medio de la cual aprobó la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999; ley y convenio declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003 con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis; delineó en su artículo 1º lo que se debe entender por discapacidad, así:

"ARTÍCULO I. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad. El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".

Frente a la definición antes transcrita y el quebranto de salud que derivó el demandante de la



actividad que cumplía en la empresa demandada, con diagnóstico de **"COMPRESIONES DE LAS RAÍCES Y PLEXOS NERVIOCOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVENRTEBRALES (M50-M511)"**, contenido en el acta de calificación de la invalidez; el actor se enmarca dentro de esa definición, de la que se extracta que el disminuido físico está limitado para *"...ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social"* y se dice lo anterior, por cuanto el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, corresponde a una discapacidad severa como lo explicó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia arriba reseñada.

Además de lo ya considerado, valga la pena resaltar que la Corte Constitucional en providencia T-198 del 16 de marzo de 2006, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, expuso que de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral no puede derivarse, en todos los casos, la minusvalía o que la persona es limitada físicamente, pues entre estas existen diferencias. He aquí un fragmento del pronunciamiento en cita:

384

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



"...se encuentra establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la **discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie**, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. **La invalidez sería el producto de una discapacidad severa.**

En efecto, el artículo 38 de la ley 100 de 1993 define la invalidez de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral."

Por el contrario, podría afirmarse que el concepto de discapacidad implica una restricción debida a la deficiencia de la facultad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para ser humano en su contexto social. En este sentido, discapacidad no puede asimilarse, necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas con un algún grado discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral, y en consecuencia, la equiparación hecha por la entidad demandada carece de fundamento constitucional, legal y científico.

De la misma manera puede afirmarse que la protección otorgada por la Constitución y desarrollada por la Ley 361 de 1997 se encuentra dirigida a la discapacidad, y no solamente a la invalidez.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



35

En efecto, la invalidez implica incapacidad para desarrollarse en el campo laboral por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral, y en consecuencia resultaría inaplicable la protección laboral reforzada establecida, puesto que la persona no estaría en las condiciones aptas para realizar ninguna clase de actividad.

Por el contrario, dicha protección cobra plena aplicación en los casos de los trabajadores discapacitados, toda vez que lo que se busca es permitir y fomentar la integración de este grupo a la vida cotidiana, incluyendo el aspecto laboral.

Es por ello, que en materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de inválido" (Lo resaltado es de la Sala).

Es así como; al estar demostrada la calidad de limitado físico del demandante y que la demandada no obtuvo autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo fluyen las consecuencias de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de acuerdo al entendimiento que a ese canon le imprimió la Corte Constitucional, en la sentencia C-531 de 5 de mayo de 2005, al exponer que "...el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria."

De allí que proceden a la vez, el reintegro y la indemnización sancionatoria, no el uno o la otra; por manera que se auscultará si procede el reintegro y las pretensiones consecuentes, de llegarse a comprobar que la empresa ha dejado de funcionar, como lo determinó el juzgado.

Efectivamente, para denegar el reintegro, la a quo consideró:

"...aunque el señor Efraín Ortega Luna tendría derecho a ser reintegrado por la sociedad demandada al mismo cargo o a un cargo de acuerdo a sus limitaciones físicas, dicho reintegro generaría mayores inconvenientes tanto para él como para la sociedad demandada, puesto que el accionante no podría desarrollar ninguna labor dentro de la empresa ya que la sociedad accionada no está realizando ninguna labor dentro de la empresa y no está desarrollando su objeto social (no está funcionando). Por lo anterior obligar a la empresa a reintegrar al señor Ortega Luna sería como imponerle un imposible, una orden inmaterializable y por lo tanto en aras de proteger los intereses del demandante y de no imponer decisiones absurdas y contrarias a la

317

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



realidad por ser de imposible cumplimiento, la sociedad demandada deberá reconocer a favor del accionante la indemnización sanción de la ley 361 de 1997, sin que haya lugar al reintegro. ..." - folio 261-.

En torno a este argumento, hay que decir que la sociedad demandada fue convocada a juicio con el siguiente nombre o enseña "INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C.- EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN" (folio 59) y como tal se notificó de la demanda, por medio de apoderada judicial constituida por el señor LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, representante legal de la misma (folios 86, 89 y 90), profesional del derecho que aportó al momento de notificarse de la demanda el certificado de existencia y representación que reposa entre los folios 87 y 88, del cual se extrae que la sociedad entró en estado de reorganización dispuesta mediante providencia administrativa No. 620-000569 del 28 de abril de 2009, emanada de la Superintendencia de Sociedades, inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de julio de 2009.

Nótese, de otro lado, que con la respuesta a la demanda presentada por dicha sociedad, se aportó la carta de terminación del contrato de trabajo dirigida al accionante, el día 6 de noviembre de 2008, en la que le indicó que esa determinación

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C., en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



derivó de las difíciles condiciones económicas por las que atravesaba la sociedad y que le llevaron a reducir la planta de personal (folio 101); luego, en pronunciamiento sobre el hecho quinto del pliego introductor (folio 103) se refirió a esa misma situación, en los siguientes términos:

"...El proceder de la empresa al terminar unilateralmente el contrato de trabajo, se realizó acorde a lo establecido por el Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La terminación del contrato de trabajo no se debió al estado de salud del señor Ortega, sino en la necesidad de reducir la nómina, pues la sociedad para esa fecha estaba físicamente imposibilitada para continuar funcionando, pues se encontraba en una crisis comercial [l] debido a todas sus acreencias [s], razón por la que a la fecha de terminación de la relación laboral, no demandaba en absoluto ningún tipo de trabajo, hecho que la obligó a solicitar la admisión en el Trámite de Reorganización Empresarial ante la Superintendencia de Sociedades en el que se encuentra actualmente. ..." (Las negrillas son del Tribunal)

De lo anteriormente constatado se concluye que a la fecha del despido del demandante (6 de noviembre de 2008 -folio 101), no se había dado inicio al proceso de reorganización empresarial, dado que el auto que así lo dispuso data del 28 de abril de 2009 (folio 88) y de otra parte

346

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



porque el proceso de reorganización empresarial, no conduce a que cesen las actividades de la empresa, aspecto que lo diferencia del proceso de liquidación, en el cual, por disposición del numeral 5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, que estatuye que la apertura del proceso de liquidación judicial produce "la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan."

Por el contrario, la apertura del proceso de reorganización tiene por efectos sobre los procesos ejecutivos en curso contra la empresa en reorganización, los cuales se hayan discriminados en el artículo 20 de la citada ley 1116; mas no afecta los contratos de trabajo.

Comparando las dos etapas del proceso concursal-reorganización y liquidación, se concluye que la primera se orienta a la preservación de las empresas viables y a la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias a través de

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
--Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



una reestructuración operacional administrativa de activos y pasivos y que la etapa de liquidación; que solo se produce ante incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999 o por las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la misma ley 1116; propende porque esta sea pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor y se inicia con la disolución de sociedad (Numeral 1º, artículo 50) y a partir de allí se producen las terminaciones de los contratos de trabajo, situación que acarrea el pago de las indemnizaciones legales.

Entonces, no puede afirmarse tan categóricamente que la persona jurídica demandada, por el solo hecho de entrar en fase de reorganización, dejó de funcionar o de operar, pues este no es el efecto de tal figura.

Además, al juzgado compareció la demandada María Nubia Flórez Osorio, el día 27 de julio de 2011, a rendir interrogatorio de parte y en esa diligencia expuso, "la empresa se encuentra en proceso de reorganización empresarial me refiero a la ley 1116 con la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y en este momento la empresa está tratando de salir de la difícil situación económica y financiera" -folio 234-.

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



Entonces, no encuentra la Sala argumentos para deducir que, ciertamente, la sociedad demandada no operaba al momento del despido del demandante o que posteriormente haya entrado en la fase de liquidación, como para que no sea viable el reintegro deprecado por la activa.

De otro lado, dado que en la sentencia de primera instancia no se incluyó al demandado como persona natural, LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL y se impuso responsabilidad a los socios hasta el monto de sus aportes, cuando aquellos responden hasta el límite de su responsabilidad, conforme lo previenen los artículos 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 323 del Código del Comercio; se modificará el numeral segundo de la parte resolutive de esa decisión, para adicionar al señor FLOREZ ARISTIZABAL y precisar que cada socio responde hasta el límite de su responsabilidad.

Por estas razones es que se adicionará la parte resolutive de la sentencia recurrida, en el sentido de ORDENAR al extremo plural demandado; INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C.- EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN, representada por LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL y los señores MARÍA NUBIA, LUZ ELENA y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO y LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL; que proceda a

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



REINTEGRAR al demandante a un cargo de igual o superior categoría al que ostentaba al día 7 de noviembre de 2008, en iguales condiciones, de acuerdo a sus limitaciones físicas y al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde esa fecha hasta la reinstalación efectiva; e igualmente a depositar los aportes a la seguridad en pensiones que se causaren en ese mismo interregno, en la administradora a la que estaba afiliado el actor en vigencia del contrato de trabajo.

Las costas de segunda instancia correrán por cuenta de la parte plural demandada y apelante vencida, conforme a los dictados de los numerales 1° de y 3° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

III. DECISIÓN

A mérito de las consideraciones anteriores, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO.- MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive de la sentencia No. 001, proferida el día 30 de enero de 2012, por el

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira, Valle, el cual quedará así **"CONDENAR** a la **INDUSTRIA CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C.**, a pagar a favor del señor **EFRAÍN ORTEGA LUNA** la suma de dos millones setecientos sesenta y nueve mil pesos (\$2.769.000,00) por concepto de la indemnización sanción contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y a los señores **LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, MARÍA NUBIA, LUZ ELENA Y OSCAR ALONSO FLOREZ**, quienes responderán hasta el límite de su responsabilidad, de conformidad con los artículos 323 del Código del Comercio y 36 del Código Sustantivo del Trabajo, suma que deberá ser indexada a partir del 07 de noviembre de 2008, hasta su pago total."

SEGUNDO.- CONDENAR a la **SOCIEDAD INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLOREZ OSORIO Y CÍA. S. EN C.- EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN**, representada por **LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL** y a los señores **MARÍA NUBIA, LUZ ELENA y OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO y LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL**, a **REINTEGRAR** al demandante a un cargo de igual o superior categoría al que ostentaba al día 7 de noviembre de 2008 y en las mismas condiciones, de acuerdo a sus limitaciones físicas, con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde esa fecha hasta la reinstalación efectiva y al depósito de los aportes a la

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en proceso de reorganización y Otros
-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.



seguridad en pensiones que se causaren en ese mismo interregno, a cuenta de la administradora de pensiones a que estuvo afiliado el actor en vigencia del contrato de trabajo.

44

TERCERO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia de recurrida.

CUARTO.- COSTAS de segunda instancia a cargo de la parte demandada; a fines de concretar su liquidación se fija la suma de \$250.000,00, por concepto de agencias en derecho, pagaderos por cada uno de sus integrantes, a favor del señor **EFRAÍN ORTEGA LUNA**.

La anterior decisión queda notificada en **ESTRADOS**.

Así, se clausura la vista pública y se suscribe el acta por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.

Los Magistrados,

MARÍA MATILDE TREJOS AGUILAR

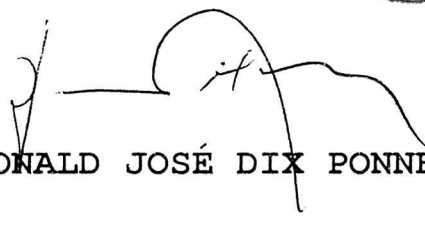
Ponente

Referencia: Apelación de sentencia proferida en proceso ordinario de Efraín Ortega Luna contra Industria Continental, Artículos Eléctricos Flórez Osorio y Cía. S. en C., en proceso de reorganización y Otros

-Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.




MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA


DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ


SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria de la Sala

327

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

Referencia: Solicitud de complementaria de sentencia proferida en proceso ordinario laboral promovido por Efraín Ortega Luna contra Industrias Continental Artículos Eléctricos Flórez Osorio & Cía. C. en S. -en proceso de reorganización- y Otros. Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.

Buga, Valle, veintinueve (29) días de agosto de dos mil trece (2013)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0153

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Procede el Tribunal a resolver la solicitud presentada por la apoderada judicial de la entidad accionada INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CIA S. EN C. en proceso de reorganización, en el sentido que se complemente o adicione la sentencia No. 022 proferida en esta sede el día 26 de julio de 2013, dentro del proceso de la referencia.

II. LA SOLICITUD

Dice la memorialista (folios 324 a 326) que debido a que la empresa que representa se encuentra incurso en trámite de reorganización empresarial está imposibilitada para realizar pagos, de conformidad a lo reglado en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, ya que de hacerlo, se haría acreedora a sanciones legales y enfatizó que por fuera del acuerdo de



reorganización no se puede realizar pagos, como se lo impuso la sentencia cuya adición solicita; por manera que peticiona la aclaración, complementación o adición de la sentencia de segunda instancia *"en el sentido de que el demandante para hacer valer el crédito reconocido en dicha providencia deberá constituirse como acreedor y presentar su acreencia en el proceso de Reorganización empresarial en el que se encuentra incurso la sociedad que represento..."*

Para decidir la mentada petición, la Sala se detendrá previamente en las siguientes

III. CONSIDERACIONES

Cierto es que en la sentencia No. 022 de julio 26 de 2012, esta Sala dedujo que debía modificarse la sentencia No. 001, proferida el día 30 de enero de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira (Valle) y en su lugar CONDENÓ a la empresa accionada; INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y a sus socios en forma solidaria; a pagar al demandante la indemnización sanción contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; a la vez que ordenó el reintegro del demandante a un cargo de igual o superior categoría al que ostentaba al día 7 de noviembre de 2008 y en las mismas condiciones, de acuerdo a sus limitaciones físicas -folios 319 y 320-.



Ahora bien, la apoderada judicial de la demandada solicita que se adicione la sentencia para que se determine que el demandante debe hacer valer el crédito, de allí surgido, en el proceso de reorganización a que está sujeta la sociedad tantas veces mencionada, en razón a la imposibilidad en que esta se encuentra incurso.

No obstante que la libelista no precisó la figura que se aplicaría al caso, entiende esta Corporación que se trata de la complementación de la sentencia, institución que se halla regulada en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil; aplicable al ámbito del rito laboral con base en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que prevé que cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

Bajo esta perspectiva, se precisa que el artículo 17 de la Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006, en ninguno de sus apartes establece que los jueces que profieran sentencias en asuntos ordinarios contra empresas inmersas en proceso de reorganización, deban disponer su incorporación a esa clase de trámites, pues dicha preceptiva se ocupa en impartir una serie de

Referencia: Sentencia complementaria proferida en proceso ordinario laboral promovido por Luis Enrique Cabrera Micolta contra Eduardo L. Gerlein S.A. - Gerleinco S.A.
Radicación Única Nacional No. 76-109-31-05-002-2007-00051-02.



prohibiciones dirigidas a los administradores y prevé sanciones por su incursión en ellas.

Sin más consideraciones, infiere esta Colegiatura que no hay lugar a complementar la sentencia proferida en esta instancia, en razón a que no dejó de resolver alguno de los puntos que fueron objeto de debate.

IV. DECISIÓN

Por lo explicitado, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga - Valle

RESUELVE

PRIMERO.- NO ACCEDER a la solicitud de complementación de la sentencia No. 022 proferida el 26 de julio de 2013 por esta Sala.

SEGUNDO.- En firme esta providencia, liquídense las costas de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

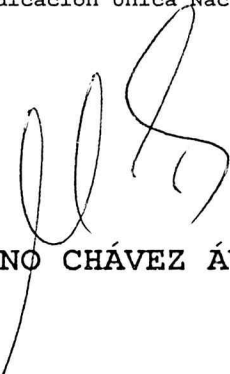
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Matilde Trejos Aguilar'.


MARÍA MATILDE TREJOS AGUILAR


Ponente

Referencia: Sentencia complementaria proferida en proceso ordinario laboral promovido por Luis Enrique Cabrera Micolta contra Eduardo L. Gerlein S.A. - Gerleingo S.A.
Radicación Única Nacional No. 76-109-31-05-002-2007-00051-02.




MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA


DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ


SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria




TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL BUGA VALLE
SECRETARIA SALA LABORAL

REFERENCIA.....ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE.....EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO.....INDUSTRIA CONTINENTAL Y OTROS
RADICACIÓN.....76-520-31-05-003-2010-00269-01

INFORME DE SECRETARIA.- Al Despacho de la Magistrada Sustanciadora paso el presente proceso, para informarle que quedó ejecutoriada la Sentencia No. 022 del 26 de julio de 2013 proferida por la Sala Laboral de este Tribunal.

Costas a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada.

Guadalajara de Buga, 5 de septiembre de 2013



SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA. VALLE
SALA LABORAL



REFERENCIA.....ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE.....EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO.....INDUSTRIA CONTINENTAL Y OTROS
RADICACIÓN.....76-520-31-05-003-2010-00269-01

AUTO No. 606

Guadalajara de Buga, 5 de septiembre de dos mil trece (2013).

Visto el informe de Secretaría, se declara ejecutoriada la Sentencia No. 022 del 26 de julio de 2013, por la Sala Laboral de este Tribunal.

Por Secretaría practíquese la respectiva liquidación de costas.

NOTIFIQUESE

MARIA MATILDE TREJOS AGUILAR
Magistrada Ponente

SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaría Sala Laboral



TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SECRETARIA SALA LABORAL

Guadalajara de Buga, 16 de septiembre de 2013

VALOR DE LAS AGENCIAS EN DERECHO.....\$250.000.00
GASTOS JUDICIALES.....\$ - 0 --
COSTAS.....\$ - 0 --

A favor de la parte demandante y a cargo de cada uno de los demandados.


SORAYA SANCHEZ BARRERA
Secretaria Sala Laboral

SECRETARIA SALA LABORAL

La anterior liquidación de costas se fija en lista por el término legal de un (1) día (art. 108 C.P.C) hoy 16 de septiembre de 2013 a las 8ª.a.m.


SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria Sala Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SECRETARIA SALA LABORAL

La anterior liquidación de costas, queda en Secretaría a disposición de las partes por el término legal de tres (3) días hábiles, hoy 17 de septiembre de 2013, a las 8ª.m. Vence término el 19 de septiembre de 2013 a las 5 p.m.


SORAYA SANCHEZ BARRERA
Secretaria



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
SECRETARIA SALA LABORAL

REFERENCIA.....ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE.....EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO.....INDUSTRIA CONTINENTAL Y OTROS
RADICACIÓN.....76-520-31-05-003-2010-00269-01

Se informa a la señora Magistrada Ponente que vencido el término legal de tres días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 393 del C.P.C., las partes no formularon objeción a la liquidación de costas.

Guadalajara de Buga, 20 de septiembre de 2013.


SORAYA SANCHEZ BARRERA
Secretaria

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SALA LABORAL



REFERENCIA.....ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE.....EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO.....INDUSTRIA CONTINENTAL Y OTROS
RADICACIÓN.....76-520-31-05-003-2010-00269-01

AUTO No. 01630

Guadalajara de Buga, 20 de septiembre dos mil trece (2013)

Por no haber sido objetada, se aprueba la anterior liquidación de costas.

Una vez ejecutoriada esta providencia devuélvase el proceso a su lugar de origen, previa cancelación de la radicación

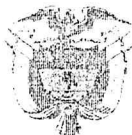
NOTIFIQUESE

MARIA MATILDE TREJOS AGUILAR

Magistrada Ponente

SORAYA SÁNCHEZ BARRERA

Secretaria



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
SECRETARIA SALA LABORAL



5+

INFORME DE SECRETARIA

PROCESO.....ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE.....EFRAIN ORTEGA LUNA

DEMANDADO.....INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTICULOS
ELECTRICOS FLOREZ OSORIO & CIA. S. EN C. EN
REORGANIZACION Y OTROS

RADICACION.....2010-000269

Guadalajara de Buga, 26 de septiembre de 2013.

Pasa a Despacho de la Magistrada Sustanciadora Dr(a). **MARIA MATILDE TREJOS AGUILAR**, escrito allegado por la apoderada judicial de la parte demandada, requiriendo nuevamente al despacho para que se pronuncie respecto a la solicitud de **ACLARACION Y/O ADICIÓN** de la sentencia de segunda instancia, previa devolución del expediente al juzgado de origen.

Consta el escrito de 05 folio(s).

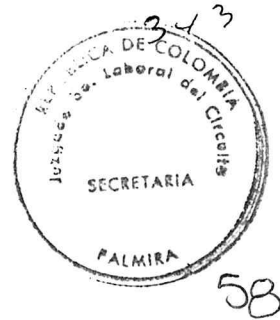
Sírvase proveer.

SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria Sala Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA



SALA UNITARIA LABORAL



Referencia: proceso ordinario laboral promovido por Efraín Ortega Luna contra Industrias Continental Artículos Eléctricos Flórez Osorio & Cía. C. en S. -en proceso de reorganización- y Otros. Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003-2010-00269-01.

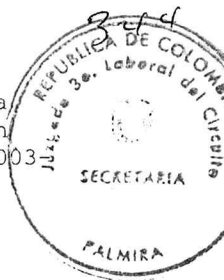
Buga, Valle, treinta (30) días de Septiembre de dos mil trece (2013)

AUTO No.0639

A folios 338 y 339 milita escrito presentado por la apoderada judicial de la entidad accionada INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTÍCULOS ELÉCTRICOS FLÓREZ OSORIO Y CIA S. EN C. en proceso de reorganización; por el cual solicita pronunciamiento sobre la petición de aclaración y/o adición de la sentencia de segunda instancia, radicada en secretaria el pasado 30 de junio del presente año.

Revisadas las actuaciones proferidas dentro del asunto en comento, se observa que la Sala Cuarta de Decisión profirió auto interlocutorio No. 0153 de data 29 de agosto del avanzado año (folio 327 a 330), en el que consideró que no había lugar a ordenar la aclaración o complementación de la sentencia No. 022 proferida el 26 de julio del mismo año por esta Sala.

Referencia: proceso ordinario laboral promovido por Efraín Ortega Luna contra Industrias Continental Artículos Eléctricos Flórez Osorio & Cia. C. en S. -en proceso de reorganización- y Otros. Radicación Única Nacional No. 76-520-31-05-003 2010-00269-01.



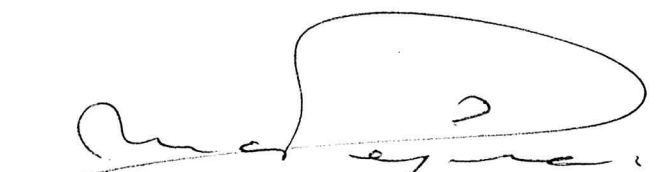
Por lo anteriormente expuesto, ésta Sala Unitaria

DISPONE:

PRIMERO.- Que la memorialista se esté a lo dispuesto en auto interlocutorio No. 0153 fechado el 29 de agosto del avanzado año.

SEGUNDO.- Continúese con el trámite del presente proceso.

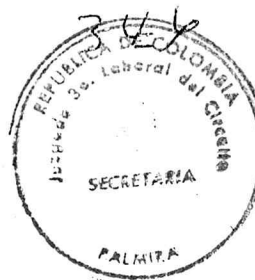
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARÍA MATILDE TREJOS AGUILAR
Magistrada Sustanciadora



SORAYA SÁNCHEZ BARRERA
Secretaria



A U T O No.- 1177

RAD. 76-520-31-05-003--0269-00-2010

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO

Palmira, VEINTIOCHO (28) de OCTUBRE del año
dos mil trece (2013).-

OBEDEZCASE Y CUMPLASE lo resuelto por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga en su providencia
de fecha VEINTISEIS (26) de JULIO del año 2013.-

PROCEDA la Secretaria a efectuar la liquidación de las
Costas a cargo de las partes demandadas y a favor de el demandante
Incluyendo las siguientes sumas de dinero correspondientes a las Agencias en
Derecho.

LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL la suma de \$500-000

MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO La suma de \$500-000

LUZ ELENA FLOREZ OSORIO la suma de \$500.000

OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO la suma de \$500.000

NOTIFIQUESE,

La Juez,


OLGA E. MUÑOZ MONTOYA

P/R.P.F.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

CONSTANCIA SECRETARIAL: Palmira, 12 de Noviembre del año dos mil Trece (2013).

LIQUIDACION DE COSTAS:

Procede el despacho a liquidar costas a cargo de la parte DEMANDADA como se ordenó dentro del presente proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, propuesto por EFRAIN ORTEGA LUNA contra INDUSTRIA CONTINENTAL Y ARTICULOS ELETRICOS FLOREZ OSORIO Con radicación No. 76-520-31-05-003-005-2010-0269 arrojando el siguiente resultado:

RADICACIÓN No. 76 520 31 05-003-2010-0269-00

VALOR AGENCIAS EN DERECHO FIJADAS EN EL AUTO NO.1177 DE OCTUBRE 28 DE 2013 (FOLIO 346)

LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL

TOTAL COSTAS:..... \$ 500.000.00

SON. QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

MARIA NUBIA FLORZ OSORIO

TOTAL COSTAS..... 500.000.00

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

LUZ ELENA FLOREZ OSORIO

TOTAL COSTAS:..... \$ 500.000.00

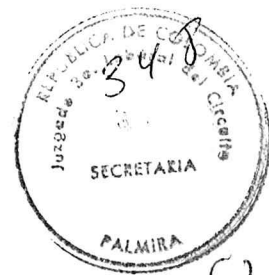
SON. QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO

TOTAL COSTAS:..... \$ 500.000.00

SON. QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

PALMIRA, NOVIEMBRE 12 DE 2013




NANCY FLOREZ TRUJILLO
Secretaria

2010 - 269

CONSTANCIA DEL TRASLADO

HOY, 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 FIJO EN LISTA DE TRASLADO LA ANTERIOR LIQUIDACION DE COSTAS. EL TRASLADO CORRE LOS DÍAS 14, 15 y 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 SON INHABILES LOS DIAS 16 y 17 (NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 393 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL).


NANCY FLOREZ TRUJILLO
Secretaria

INFORME: A Despacho de la señora Juez paso hoy, 02 de diciembre de 2013, el presente proceso informándole que la apoderada judicial de la parte demandada objetó la liquidación de costas.



NANCY FLOREZ TRUJILLO
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA,
DEMANDANTE: EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO: INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS
FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., LUIS OCTAVIO FLOREZ
ARISTIZABAL, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ
OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO.
RADICACIÓN NO. 76 520 31 05 - 003 2010 00269 00

AUTO INTERLOCUTORIO No. 976

Palmira Valle, dos (02) de diciembre de dos mil trece
(2013)

Visto el informe de Secretaría y teniendo en cuenta que la apoderada judicial de la parte demandada, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO, presentó oportunamente objeción a la liquidación de costas procede el Despacho a pronunciarse.

Alega la mandataria judicial que el valor de \$500.000 a cargo de cada una de los demandados a quienes representa (total \$1.500.000), que fijó el Despacho como agencias en derecho, no se tuvo en cuenta lo consagrado en el Acuerdo 1887 de 2013, modificado por el Acuerdo No. 222 de 2003 emanados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que el monto fijado carece de sustento fáctico y legal que permita sostener según ella una tasación tan elevada.

Adicionalmente alega que tomando como base las actuaciones y erogaciones de los demandantes no se observa que en ellas se hayan invertido recursos por parte de los entes demandados, ni requirió de ellos mayores esfuerzos para su aportación y recepción por el Despacho, por tanto, considera que la tasación de costas y agencias en derecho contraviene las estipulaciones legales, contractuales y convencionales.



Así mismo se remite al numeral 3° del art. 393 del Código de Procedimiento Civil el cual prevé que para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, y advierte que si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Para resolver se considera.

Le asiste razón a la mandataria judicial, en cuanto a que si bien el juez tiene la discrecionalidad para fijar las agencias en derecho, tal discrecionalidad se la da la ley.

Este despacho al fijar las agencias en derecho se remitió al Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente con fundamento de los criterios referidos en el artículo 3° que dice:

El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones".

Por su parte el numeral 2.1.1. del ítem 2.1 del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, que preceptúa:

"ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

...II. LABORAL

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.



PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Como se puede observar, el valor total de las pretensiones a favor del trabajador oscilan aproximadamente a \$12.160.320, que corresponde a las prestaciones sociales y vacaciones liquidadas solo con salario mínimo legal desde el 07 de noviembre de 2008 hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, mas el valor de \$2.769.000, por concepto de indemnización sanción contemplada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, liquidada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga en sentencia 022 del 26 de julio de 2013 (folio 320), valor al que se le aplicó un 16.5%, cuyo resultado total fue \$2.006.453, valor que fue aproximado a \$2.000.000, cifra que corresponde al valor total de las agencias en derecho fijadas por el Despacho; de ahí que el Despacho no se apartó de los lineamientos de la norma en cita.

De lo anterior se colige que el tope estipulado por el Juzgado no fue ni inferior ni superior al regulado en la norma antes transcrita para los procesos ordinarios de primera instancia, es más, atendiendo la calidad de gestión jurídica adelantada en el curso del trámite procesal se estipuló un porcentaje que no rebasa el estipulado legalmente.

Por las anteriores consideraciones no se acepta la objeción formulada por la mandataria judicial de la parte demandada, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO.

En consecuencia, el juzgado resuelve

RESUELVE:

1. No acceder a la objeción de costas presentada por la apoderada judicial de la parte demandada, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO en lo referente a las agencias en derecho. Por lo que se aprueba la anterior liquidación de costas por valor total de \$2.000.000, y a cargo de cada uno de los demandados \$500.000.
2. Archivar el proceso previa cancelación de su radicación.

NOTIFÍQUESE

La Juez,


OLGA EMILIA MUÑOZ MONTOYA

INFORME: A Despacho de la señora Juez paso hoy, 14 de febrero de 2014, el presente proceso informándole que en el auto No. 976 del 02 de diciembre de 2013, mediante el cual se ordenó el archivo del proceso, no hubo pronunciamiento expreso respecto de la objeción de las costas presentada el día 18 de noviembre de 2013 por la apoderada judicial de la parte demandada, INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y del señor OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL.



NANCY FLOREZ TRUJILLO
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA,
DEMANDANTE: EFRAIN ORTEGA LUNA
DEMANDADO: INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., LUIS OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, MARIA NUBIA FLOREZ OSORIO, OSCAR ALONSO FLOREZ OSORIO Y LUZ ELENA FLOREZ OSORIO.
RADICACIÓN NO. 76 520 31 05 - 003 2010 00269 00

AUTO INTERLOCUTORIO No. 123

Palmira Valle, catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014)

Visto el informe de Secretaría y teniendo en cuenta que en el auto No. 976 del 02 de diciembre de 2013, mediante el cual se ordenó el archivo del proceso, no hubo pronunciamiento expreso respecto de la objeción de las costas presentada el día 18 de noviembre de 2013 por la apoderada judicial de la parte demandada, INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y del señor OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, se dejará sin efecto el numeral 2. de la parte resolutive del auto 976 del 02 de diciembre de 2013, que resolvió archivar el proceso, y procederá el Despacho a pronunciarse sobre la objeción de las costas antes referida.

Alega la mandataria judicial de INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y del señor OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL que la fijación de las agencias en derecho está por encima del tope que autoriza



la ley y como sustento jurídico invoca el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su art 3 y el numeral 3° del art. 393 del Código de Procedimiento Civil. En términos generales refiere la mandataria que el Despacho no tuvo en cuenta que el proceso no se practicaron inspección judiciales ni la inexistencia de la dificultad en el desarrollo de la tarea ejecutada por la parte actora, por lo que solicita reformar la liquidación de las costas y agencias en derecho, y en su lugar disminuir el valor de las mismas.

Para resolver se considera.

Le asiste razón a la mandataria judicial, en cuanto a que si bien el juez tiene la discrecionalidad para fijar las agencias en derecho, tal discrecionalidad se la da la ley.

Este despacho al fijar las agencias en derecho se remitió al Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente con fundamento de los criterios referidos en el artículo 3° que dice:

El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones".

Por su parte el numeral 2.1.1. del ítem 2.1 del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, que preceptúa:

"ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

...II. LABORAL

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se

incrementará hasta cuatro (4) salarios
mínimos mensuales legales vigentes por
este concepto.



PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones
periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales
legales vigentes".

Como se puede observar, el valor total de las pretensiones a favor del trabajador oscilan aproximadamente a \$12.160.320, que corresponde a las prestaciones sociales y vacaciones liquidadas solo con salario mínimo legal desde el 07 de noviembre de 2008 hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, mas el valor de \$2.769.000, por concepto de indemnización sanción contemplada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, liquidada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga en sentencia 022 del 26 de julio de 2013 (folio 320), valor al que se le aplicó un 16.5%, cuyo resultado total fue \$2.006.453, valor que fue aproximado a \$2.000.000, cifra que corresponde al valor total de las agencias en derecho fijadas por el Despacho; de ahí que el Despacho no se apartó de los lineamientos de la norma en cita.

De lo anterior se colige que el tope estipulado por el Juzgado no fue ni inferior ni superior al regulado en la norma antes transcrita para los procesos ordinarios de primera instancia, es más, atendiendo la calidad de gestión jurídica adelantada en el curso del trámite procesal se estipuló un porcentaje que no rebasa el estipulado legalmente.

Por las anteriores consideraciones no se acepta la objeción formulada por la mandataria judicial de la parte demandada, INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y del señor OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL.

En consecuencia, el juzgado resuelve

RESUELVE:

1. Dejar sin efecto el numeral 2 de la parte resolutive del auto 976 del 02 de diciembre de 2013, en cuanto ordenó el archivo del proceso.
2. No acceder a la objeción de costas presentada por la apoderada judicial de la parte demandada, INDUSTRIAS CONTINENTAL, ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO Y CIA S. EN C., y del señor OCTAVIO FLOREZ ARISTIZABAL, en lo referente a las agencias en derecho. Por lo que se

mantiene la aprobación de la liquidación de costas por valor total de \$2.000.000, y a cargo de cada uno de los demandados \$500.000 declarada en el numeral 1. de la parte resolutive del auto 976 del 02 de diciembre de 2013 por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.



3. Archivar el proceso previa cancelación de su radicación.

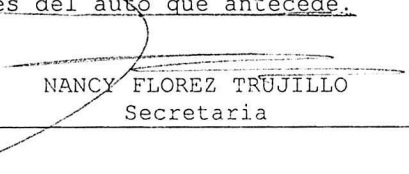
NOTIFÍQUESE

La Juez,


OLGA EMILIA MUÑOZ MONTOYA

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE

Hoy, 17 DE FEBRERO DE 2014 se
notifican Por ESTADO No. 25 a las
partes del auto que antecede.


NANCY FLOREZ TRUJILLO
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA

H A C E C O N S T A R :

Que las copias de las piezas procesales que obran dentro del proceso que anteceden y constantes en SESENTA Y NUEVE (69) folios, son FIELES Y EXACTAS a el PROCESO ORDINARIO LABORAL, bajo el Radicado: 2010-0269, instaurado por el señor **EFRAIN ORTEGA LUNA vs. INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTICULOS ELECTRICOS FLOREZ OSORIO & CIA S. EN C.**

Dejando constancia que son las PRIMERAS que se expiden.

Para constancia se firma la presente en Palmira Valle a los SIETE (07) días del mes de MARZO del año dos mil catorce (2014).-

La Secretaria,


NANCY FLOREZ TRUJILLO